

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por HUBER ANTONIO ARTEAGA MOLINA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-014-2020-00176-01).

**ANTECEDENTES**

El demandante pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa en aplicación del Decreto 758 de 1990, a partir de la fecha en que se estructuró su estado, con inclusión de los intereses de mora o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

Como sustento de lo anterior, comentó que nació el 04 de julio de 1939, contando para la presentación de la demanda con 80 años de edad. Se afilió al ISS efectuando cotizaciones entre el 01 de enero de 1967 y hasta el 22 de agosto de 1980, alcanzando 711.86 semanas. Por padecimientos médicos solicitó el 08 de agosto de 2018 la calificación de su pérdida de capacidad laboral, radicando petición el 04 de septiembre de 2019 para la asignación de la cita para su valoración, cometido logrado por medio del trámite sumario de tutela, de donde surgió el dictamen que le asignó una pérdida de capacidad

laboral del 68.67% con fecha de estructuración del 17 de diciembre de 2019. El 17 de junio de 2020 elevó solicitud de pensión de invalidez ante Colpensiones bajo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, sin obtener respuesta. Agregó que por medio de la resolución GNR 138140 del 27 de abril de 2014, le fue concedida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

COLPENSIONES, al dar respuesta al libelo, aceptó la mayoría de los hechos expuestos, pero con oposición a las pretensiones por considerar que el actor además de no cumplir con las exigencias de la Ley 860 de 2003, no demuestra la acreditación de las estipulaciones jurisprudenciales para serle aplicado el principio constitucional pregonado. Como excepciones de mérito formuló las que denominó Inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez sin la acreditación de los requisitos legales, improcedencia del pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, improcedencia de la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia que profirió el 01 de marzo de 2022, DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de invalidez del demandante, a la luz de lo dispuesto en la sentencia SU 556 de 2019, y ABSOLVIÓ a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, sin imposición de costas procesales en esa oportunidad.

El demandante a través de su mandataria judicial interpuso recurso de apelación a fin de que se revoque la decisión, por considerar que contrario a los argumentos planteados en la providencia, en el asunto si se cumplen las condiciones del test de procedencia para ser beneficiario de la prerrogativa constitucional y acceder a la pensión de invalidez, enfocándose en la segunda de las exigencias que el Juez encontró no demostrada, advirtiendo que bajo el concepto del mínimo vital el salario mínimo que el demandante recibe por concepto de la pensión que le fue otorgada por razones profesionales a partir de las reglas de la experiencia no alcanza para suplir

las necesidades básicas, pudiendo determinarse del testimonio recibido que el señor Huber Antonio cubre un arriendo de \$750.000 y un valor de \$250.000 por servicios públicos, lo que de un simple cálculo matemático deja ver que no le es posible solventar los gastos de alimentación, copagos y recreación y a eso es a lo que apunta a su juicio la Corte Constitucional, por lo que refleja un escenario en el que una vecina les debe colaborar económicamente, no tiene ingresos adicionales ni reciben ayuda de terceras personas aspectos con los que aduce se da una afectación al mínimo vital.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero indicar que no es objeto de discusión que el demandante tiene la condición de inválido descrita en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, estructurada desde el 17 de diciembre de 2019 (Págs. 32-37 Archivo 03), quien viene percibiendo una prestación por invalidez de origen profesional a partir del 18 de junio de 1978 en cuantía para esa época de \$1.311,70, que hoy se acompasa al equivalente de un salario mínimo legal mensual vigente (Archivo 14).

Atendiendo lo anterior y a los argumentos de la alzada, el problema jurídico consiste en determinar si en virtud del principio de la condición más beneficiosa, es o no dable pregonar que el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez por la satisfacción de las condiciones enlistadas dentro del test de procedencia dispuesto por la Corte Constitucional, para darse aplicación al Decreto 758 de 1990 en persona que estructuró su invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003.

Estando frente al claro panorama en el que el demandante no satisface las exigencias de la Ley 860 de 2003, aplicable por razón de la teoría del hecho causante, pues en su vigencia se estructuró la pérdida de la capacidad

laboral- 17 de diciembre de 2019-, ni tampoco cumple las prerrogativas que enlista el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, esta Sala de Decisión Laboral debe verificar si el principio constitucional que se pretende sea aplicado para acceder a la prestación por cubrimiento del riesgo de invalidez resulta procedente en el asunto, ya que al no ser absoluto, no cobija todos los casos, debiendo acudirse para tal efecto a las reglas fijadas en la jurisprudencia, pretermitiéndose el análisis que la H. Corte Suprema de Justicia ha adoptado, pues no se encuadra a las condiciones particulares del asunto, por un lado, porque la normativa que se busca ser aplicada no corresponde a la inmediatamente precedente, y por otro, porque no se logra cumplir el requisito de temporalidad de tres (3) años establecidos como “zona de paso” entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, ya que los efectos jurídicos de la nueva norma fueron diferidos hasta el 29 de diciembre de 2006 y en este caso como se dijo, la estructuración de la invalidez se produjo el 17 de diciembre de 2019.

En ese contexto, se acude a lo definido en la SU 556 de 2019 que ajustó lo fijado en la SU 442 de 2016, en cuanto al alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez, permitiendo que en casos como el examinado, donde la persona tiene una pérdida de capacidad laboral estructurada en vigencia de la Ley 860 de 2003, se aplique en virtud de la condición más beneficiosa el Decreto 758 de 1990, en la medida en que se hubiera cumplido la densidad de semanas de cotización antes de que este último fuera derogado, por entenderse que se creó una expectativa legítima mientras estaba en vigor la versión original de la Ley 100 de 1993, con lo que se busca proteger a las personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta derivada de una condición de invalidez, cumpliendo con los cometidos constitucionales de promover las condiciones que hagan posible una igualdad real y efectiva, resaltando que no existía un detrimento patrimonial o afectación a la estabilidad financiera, en tanto existía un cúmulo significativo de cotizaciones que respaldan la prestación (Corte Constitucional T-717 de 2014 y T-137 de 2016).

Así es como la pensión de invalidez de Huber Antonio Arteaga podría resolverse conforme a lo previsto en el Decreto 758 de 1990, en cuanto a la densidad de semanas de cotización exigidas porque es indiscutido que para cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 el fallecido ya contaba con 711.86 semanas; no obstante, la causación de esta prestación solo es posible si se acredita por parte de la activa que es una persona vulnerable, consideradas como tales aquellos individuos que hayan superado el Test de procedencia que determina la acreditación de las siguientes cuatro condiciones necesarias y en conjunto suficientes, para hacerse beneficiario de la prestación:

i) Pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, debiendo acreditarse que *“...el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.”*, requisito que se cumple a cabalidad, ya que se trata de una persona que en la actualidad cuenta con 83 años, aunado a que se trata de una persona en condición de invalidez por superar la calificación de su pérdida de capacidad laboral el 50% (Págs. 32-37 Archivo 03), quien por demás padece una enfermedad calificada como crónica, degenerativa y catastrófica según se registra en la pericia de su evaluación ocupacional.

ii) Que exista afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas por la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez, situación que ha de analizarse con posterioridad a la fecha de estructuración de su condición de minusvalía, puesto que versa sobre el deterioro de las condiciones materiales de vida que se afronta por el estado médico.

Al respecto y de cara a los fundamentos de la providencia que se revisa en coherencia con los argumentos de la alzada, se tiene que aunque la Corte Constitucional ha definido el mínimo vital como un derecho fundamental que le permite al individuo vivir de acuerdo con el estilo de vida que lo caracteriza, conforme a su situación económica y todo lo que requiere para vivir dignamente, también ha precisado que no cualquier variación en los ingresos supone su desconocimiento, debido a que cada persona tiene un mínimo vital diferente, que obedece a la condición socioeconómica alcanzada. En este sentido, la sentencia SU-995 de 1999, indicó que esta valoración depende de la situación del accionante, la cual no se identifica con el monto de las sumas que se adeuden o a el valor que se atribuya a las necesidades mínimas que debe cubrir para subsistir, sino con *“la tasación material de su trabajo”*.

En ese orden y en lo pertinente, la alta corporación constitucional ha dispuesto que: *“Si bien ciertos criterios económicos permiten fijar un salario mínimo, como base ineludible para la negociación colectiva o individual del salario entre las partes de una relación laboral, ésta es una medición que no agota el aludido concepto de mínimo vital protegida por la Constitución, ni puede identificarse con él sin dar al traste con la cláusula del Estado Social de Derecho y desnaturalizar el principio de igualdad. En efecto, cada individuo que ingresa al mercado laboral -independientemente del estrato que ocupe-, recibe una retribución económica que, en principio, constituye la base de los gastos de manutención que plausiblemente espera cubrir y de las carencias que aspira superar. De ahí, que la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida (v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida”*.

Lo previo quiere decir que el análisis debe partir de las condiciones propias de cada solicitante, encontrando que para el presente asunto, el señor Arteaga Molina viene percibiendo desde el año 1978 una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente de cuenta de una

condición adquirida en razón de su trabajo. La recurrente afirma como sustento a su disenso que este ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas del núcleo familiar que conforma con su cónyuge Adriana María Muñoz, lo que basa a partir de un cálculo matemático de los gastos, y del testimonio de Luz Angela Pérez Quintero quien expuso por conocimiento directo que lo percibido por el demandante solo alcanza para cubrir su vivienda y los servicios públicos.

Pero es que para pregonar si un salario mínimo colombiano alcanza o no a cubrir las necesidades básicas de un hogar, no se puede estar sujeto a una respuesta concreta y definitiva para todos los casos como lo proyecta la apoderada inconforme, ya que ello depende de las dinámicas y patrones de ingreso y consumo de cada uno, por lo que no es posible que el actor a partir de las condiciones de vida que lo han acompañado por más de cuatro décadas, sugiera que el salario mínimo percibido desde 1978 le impida subsistir dignamente, ya que esa retribución económica corresponde a la condición socioeconómica que alcanzó en el transcurso de su vida junto con su cónyuge, y en esa línea, ha debido constituir la base de los gastos de su manutención, por lo que si bien la obligación del estado con su característica de social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del territorio nacional una vida digna, ello es dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance, no siendo posible asegurar que dada la cuantía de la prestación, el señor Huber ha vivido durante toda su existencia en condiciones de indignidad, concepto que difiere de la aspiración a contar con un mejor nivel de vida, y con posibilidades de planear una mejor distribución de los ingresos.

Y es que aunque la testigo Luz Angela Pérez Quintero refirió los valores que el actor cancela para cubrir los gastos de vivienda y servicios públicos, a partir del entorno personal y familiar, no resulta ser el factor cuantitativo el de relevancia sino que lo es el cualitativo, cuyas condiciones del actor no permiten aseverar que esté enfrentado a un estado asociado a desprotección y fragilidad económica, resultando ser un despropósito colegir acorde al dicho

de la deponente, que el actor por más de cuarenta años en el cubrimiento de la alimentación y el vestido ha estado sujeto a terceros, y aunque es verdad que el deterioro en su salud pudiera derivar más gastos de lo habitual, ello *per se* no es un indicador de una situación precaria que deba ser contemplada, ni es posible darla por hecho a partir del dicho generalizado de una testigo, pues de él no puede determinarse de manera clara el agravio sobre los ingresos, a partir del hecho indudable que es el Sistema quien cubre sus gastos médicos.

Es así como debe considerarse que la prestación perseguida bajo esta excepcionalísima regla constitucional, está dirigida a casos extremos donde el interesado tiene una evidente condición de vulnerabilidad, pues no otro fue el propósito de la Corte Constitucional para encontrar razonable y proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa con aplicación ultractiva de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 en lo que respecta a la exigencia de densidad de semanas de cotización, a pesar de que su condición de invalidez se hubiere estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003, por lo que siendo que el actor con su mesada pensional mínima ha contado con los recursos para solucionar y satisfacer las necesidades primarias que también se relacionan con la salud por su calidad de cotizante obligatorio, no es posible advertir una ausencia de recursos para la preservación de calidad de vida dentro de los estándares de dignidad que justifique flexibilizar el estudio de esta prerrogativa constitucional, siendo preciso resaltar que percibir de manera fija un rubro que bajo condiciones regulares en un grupo familiar conformado por dos personas adultas solventa los requerimientos esenciales, no puede suponer la afectación de manera directa contra sus condiciones elementales de vida.

Bajo las anteriores reflexiones, concluye la Sala que el demandante no cumple con el segundo requisito, necesario para que bajo la condición más beneficiosa accediera a la pensión de invalidez perseguida, dando razón bajo ese postulado a la decisión absolutoria del *a quo*.




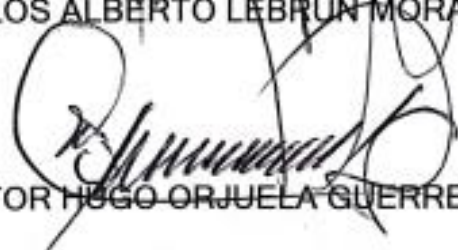
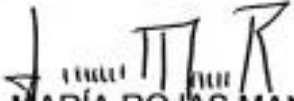
Conforme a lo preceptuado en el artículo 365-3 del CGP las costas en esta instancia son a cargo del demandante, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocidas. Costas en esta instancia son a cargo del demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501420200017602</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>HUBER ANTONIO MOLINA ARTEAGA</b>
<b>Demandado:</b>	<b>COLPENSIONES</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>16/03/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 17/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario